

Crimen organizado, amenaza a la integridad y equidad electorales.

El caso de Michoacán, México.

Jaime Rivera Velázquez¹

La implantación y expansión del crimen organizado en varios países de América Latina, además de afectar gravemente a la seguridad pública, la economía y las instituciones públicas, en algunos casos han propiciado que organizaciones delictivas constituyan un factor de injerencia y distorsión en la competencia electoral. La violencia y las amenazas contra determinados partidos o candidatos, y el financiamiento ilícito de otros por parte de la delincuencia, lesionan los principios de integridad de un proceso electoral, así como las condiciones de equidad de la contienda.

Desde la década de 1980, México ha sido afectado gravemente por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, a raíz de las restricciones impuestas a las rutas de traslado de cocaína a Estados Unidos a través del Mar Caribe, que propiciaron que en México se habilitaran rutas alternativas, tanto terrestres como marítimas, y las grupos locales, dedicados tradicionalmente al cultivo y tráfico de marihuana y amapola, se transformaran en verdaderos cárteles trasnacionales de cocaína y otras drogas. En las dos décadas siguientes, el crimen organizado fortaleció sus capacidades armadas y financieras, y con ellas aumentó su capacidad de corrupción y captura de organismos de gobierno.

En los últimos años, son cada vez más frecuentes las denuncias o sospechas de intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones mexicanas, particularmente en el nivel local. Numerosos candidatos a alcaldes o a diputados han sido señalados como presuntamente vinculados a grupos delictivos, y algunos de ellos han resultado electos. Inclusive, hay indicios sólidos de injerencia de la mafia en la elección de algunos gobernadores de estados. En otros casos, las organizaciones criminales han intervenido en las contiendas políticas, amenazando o incluso asesinando a candidatos o a alcaldes en funciones. Otras formas de intervención de la delincuencia organizada en la competencia electoral es la presión para que algún partido postule candidatos vinculados a ella, así como la intimidación o manipulación de electores a favor de determinados candidatos.

* Polítólogo. Maestro en Sociología, candidato a doctor en Ciencia Política. Profesor-investigador de la Universidad Michoacana. Correo: jriverav@prodigy.net.mx

En el escenario mexicano, el estado de Michoacán destaca como uno de los que padecen en mayor medida la presencia de los grupos criminales y su eventual intromisión en las elecciones y en las acciones de gobierno. Durante el último decenio, los grupos de narcotraficantes tradicionales de Michoacán se convirtieron en poderosas organizaciones que extendieron sus actividades al tráfico de cocaína, la producción de drogas sintéticas, el contrabando de minerales, el secuestro, la extorsión y el dominio territorial. En poco tiempo, la mafia sometió a su dominio también a numerosos gobiernos municipales y a órganos de seguridad del gobierno estatal. De ahí, sólo había un paso para determinar la postulación de candidatos de diversos partidos, financiar campañas y coaccionar el voto de los ciudadanos en los territorios controlados.

En el presente estudio se da una visión general sobre la evolución del narcotráfico en Michoacán y las formas en que la delincuencia organizada ha incidido en la política michoacana (colusión con candidatos y funcionarios, extorsiones y asesinatos), y cómo esas acciones desvirtúan las condiciones básicas de la integridad electoral y la equidad en la competencia.

I. Michoacán: del narcotráfico tradicional al imperio del crimen organizado.

Desde la década de 1940, el estado de Michoacán –localizado al suroeste de México– empezó a cultivar marihuana y más tarde amapola, para proveer a los exportadores de Sinaloa (en el noroeste). El clima y las extensas serranías mal comunicadas y con escasa presencia del Estado, favorecían esos cultivos, que ofrecían a una población rural pobre –principalmente de la región conocida como Tierra Caliente y de la Sierra Madre del Sur– una opción económica más atractiva que los cultivos tradicionales de subsistencia. Durante cuatro décadas, esas actividades se desarrollaron con relativa tranquilidad; eran ilegales y estaban sujetas a operativos periódicos de erradicación de plantíos y detención de productores por parte del ejército y la policía; pero a la vez eran toleradas por las autoridades mediante sobornos, y aceptadas por buena parte de los habitantes locales, que veían en los cultivos de droga una fuente de derrama económica directa o indirecta. El papel de los productores michoacanos como socios subordinados a los narcotraficantes del

norte del país no favorecía la formación de grandes organizaciones delictivas locales. La protección discreta por parte de autoridades locales y federales de la que gozó el narcotráfico en México por varias décadas, reforzaba el *statu quo* de paz en la ilegalidad.

Esta situación empezó a cambiar en la década de 1980, con la apertura de las rutas de la cocaína en México. (Grillo, ; Valdés, 2013:). Ante el auge de la demanda en Estados Unidos, desde América del Sur ya no sólo operaron las vías aéreas, sino también las marítimas por el Pacífico y el Golfo. El largo litoral de Michoacán en el Océano Pacífico (230 kilómetros) y el puerto de Lázaro Cárdenas transformaron a esta región en una ruta estratégica para el trasiego de drogas. Además, en los años noventa se introdujo la producción de drogas sintéticas (metanfetaminas), cuyos precursores químicos provienen primordialmente de Asia a través del Pacífico. Así surgió en Michoacán una organización local con pretensiones de cártel, el de *Los Valencia*, después llamado *Cártel del Milenio* (Ravelo, 2006: 196-204). Esta organización de narcotráfico prosperó como proveedora de marihuana y cocaína (proveniente de Colombia) a los cárteles de Ciudad Juárez, y más tarde de Tijuana y Sinaloa, y ampliaron su negocio propio con la producción y distribución de metanfetaminas.

Un cambio mayor se produjo a partir de 2001, cuando el brazo armado del *Cártel del Golfo*, los *Zetas*, se lanzó a conquistar la plaza de Michoacán. Para los pasos fronterizos de Tamaulipas controlados por esta organización, Michoacán es una posición estratégica por su ubicación en la costa del Pacífico y su relativa cercanía: las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo distan del puerto de Lázaro Cárdenas y de las principales zonas michoacanas productoras de marihuana y amapola, entre 1 000 y 1 200 kilómetros (mientras que Tijuana y Nogales, en el extremo noroeste de México, controlada por las organizaciones del Pacífico, se encuentran a más de 2 000 kilómetros de Michoacán). Pero Michoacán ya estaba ocupado por la organización de *Los Valencia* y sus socios del Pacífico, y los *Zetas* tuvieron que pelear por él. Buscaron aliados locales en Michoacán y empezaron a disputar la plaza con dosis de violencia que Michoacán no había conocido hasta entonces. En un par de años lograron expulsar a sus rivales, dejando tras de sí centenares de muertos. De esa forma, el *Cártel del Golfo* se apropió de una codiciada ruta para la cocaína desde la costa del Pacífico hasta Tamaulipas. Además, Michoacán se

convirtió en una de las zonas más importantes de producción de metanfetaminas, con cientos de laboratorios diseminados por toda la entidad.

Pero los *Zetas* no sólo se apoderaron del tráfico de drogas en Michoacán; también compartieron con sus aliados locales -llamados al principio *La Empresa*- un nuevo “modelo de operación criminal” (Valdés, 2013: 257-261), que consiste en agregar al negocio de las drogas el dominio territorial para controlar todos los negocios ilícitos y expoliar a la población por medio del secuestro y la extorsión. Un verdadero sistema de extracción de rentas sociales basado en la amenaza y la violencia. En poco tiempo, extendieron la extorsión a las autoridades municipales de las zonas controladas. Así, a partir de 2002 ó 2003, muchos michoacanos empezaron a dejar de ver al narcotráfico como un fenómeno cercano pero inocuo; en adelante, la delincuencia organizada estaría asociada a tiroteos, amenazas, pago forzado de cuotas, secuestros y, en no pocos casos, a ejecuciones de personas que nada tenían que ver con la delincuencia, salvo como víctimas.

La Familia Michoacana y los Templarios

Los métodos brutales de los *Zetas* perturbaron radicalmente la forma tradicional de relación de la sociedad local de Michoacán con el narcotráfico. Sus aliados michoacanos, con arraigo en los poblados y relacionados personalmente con mucha gente, veían cundir el miedo y el descontento por la violencia de los *Zetas*, y decidieron romper con éstos. En 2006, después de unos meses de disputas internas y centenares de ejecuciones de ambos bandos, salió a la luz pública una nueva organización, *La Familia Michoacana*. Formada por ex aliados y discípulos de los *Zetas*, *La Familia* anunciaría como propósito central liberar a Michoacán de los *Zetas*. Su debut en la escena pública ocurrió en la ciudad de Uruapan en septiembre de 2006, cuando lanzaron a la pista de baile de una discoteca cinco cabezas humanas y una cartulina con el mensaje: “La Familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina”. Dos semanas después, varios periódicos locales publicaron un manifiesto de *La Familia Michoacana* en el que se proclaman los objetivos de imponer el orden, terminar con el secuestro, la extorsión, los robos y los asesinatos, así como con la venta local de drogas sintéticas. En ese manifiesto, además, *La Familia* se autodefine como una organización integrada por “trabajadores de la región de Tierra Caliente organizados por la

necesidad de terminar con la opresión, la humillación... por la gente que siempre ha detentado el poder”. (Valdés, 2013: 267-269). Una mezcla singular de lucha contra la delincuencia y bandolerismo social con tintes antigubernamentales.

Durante 2006 y 2007 se desató en Michoacán una nueva guerra entre cárteles –*La Familia* contra los *Zetas*– que en el primer año causó más de 500 muertos (Guerrero, 2012). La intervención de las fuerzas federales, ordenada por el nuevo presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, obligó a los sicarios a replegarse y los homicidios disminuyeron. A principios de 2008 las células del cártel *Golfo-Zetas* estaban diezmadas y expulsadas. *La Familia* se quedó con un virtual monopolio del negocio de las drogas en Michoacán.

Ya sin enemigos de consideración en el terreno, los capos y sicarios de *La Familia* pudieron desplegar libremente su modelo de negocios criminal, en parte aprendido de los *Zetas*, pero con su sello propio. Impusieron el control territorial y el cobro de “derecho de piso” para todas las actividades ilícitas; no tardaron en vender protección y cobrar “impuestos” a agricultores ricos; después extendieron la red de extorsiones a toda clase de personas susceptibles de extraerles recursos: comerciantes establecidos, transportistas, pequeños agricultores, vendedores ambulantes, etcétera.

Un rasgo peculiar de *La Familia Michoacana* que llamó mucho la atención y que inclusive condujo a muchos a justificar sus actividades delictivas, era el discurso religioso, moral y de radicalismo social con el que buscaba justificar sus acciones delictivas y atraerse apoyo popular. Su líder máximo, Nazario Moreno González, alias *El Chayo*, también apodado “El más loco”, combinaba sus decisiones y actos criminales con una doctrina pseudo-cristiana de liberación espiritual, superación personal y servicio a los demás. Servando Gómez Martínez, *La Tuta*, un profesor rural formado en las filas del radicalismo de izquierda del sindicato magisterial, fungía como vocero y propagandista de *La Familia*, con una retórica antigubernamental, populista y justiciera que también contribuyó a atraer simpatías. Lo cierto es que *La Familia* sí logró hacerse de una base social de apoyo. En primer lugar, por su promesa de liberar a la población de las extorsiones, robos y violencia de los *Zetas*; en segundo, porque los operadores de la nueva organización daban recompensas a quienes les ayudaban con información o como intermediarios para conseguir

negocios, y en tercero, porque su oferta de “protección” iba acompañada de amenazas que más valía tomar en serio.

Los jefes y “delegados de plaza” de *La Familia* aparecían así como autoridad alterna que lo mismo cobraba impuestos, que resolvía controversias entre particulares, ajusticiaba a infractores, patrocinaba fiestas religiosas y sometía a autoridades locales. Eran respetados y temidos. Una variante del estilo siciliano de dominación.

No obstante su retórica moral y religiosa, la violencia era un recurso indispensable del modo de operación de *La Familia*, como lo es de cualquier grupo dedicado a negocios ilegales. De hecho, esta organización dio muestras de formas extremas y macabras de ejercer la violencia, como exhibir cabezas cercenadas y amontonar cadáveres en la vía pública. Probablemente por su alianza temporal con los *Zetas*, los jefes de *La Familia* adoptaron métodos perversos e inhumanos para entrenar a sus sicarios.

II. “Plata o plomo”: omisión, sumisión o complicidad de gobernantes.

En la medida que la delincuencia consolidó su nuevo modelo de operación criminal, extendió su acción de los particulares a las autoridades políticas. La Familia Michoacana se convirtió en un factor político de primer orden, que influiría en la competencia electoral y en el ejercicio del poder político. En el México de la última década, y destacadamente en el estado de Michoacán, se ha vuelto popular una divisa del crimen organizado para someter a autoridades de gobierno o candidatos a cargos de elección: “Plata o plomo”; aceptas dinero por ayudarnos a cometer delitos o te matamos. Comprensiblemente, muchas de las personas así amenazadas acceden a cooperar con los criminales. La serie de asesinatos de presidentes municipales en Michoacán durante los últimos años dan cuenta de que las amenazas no son vanas. No son pocos los casos en que ese vínculo de sumisión y complicidad de políticos para con los criminales se establece desde antes de ocupar los cargos públicos. Hay también casos en que algunos miembros destacados de una organización criminal participan directamente como candidatos a cargos de elección popular. No siempre es posible distinguir si los políticos convertidos en representantes populares fueron cooptados o sometidos por la delincuencia, o si ya eran delincuentes y decidieron incursionar en la política para aumentar su poder.

Pueden distinguirse cuatro modalidades de influencia de la organización criminal sobre actores políticos:

- 1) Apoyo a candidatos a cargos de elección popular, a cambio de complicidad futura.
- 2) Postulación directa de miembros de la organización delincuencia.
- 3) Cooptación bajo amenaza o soborno de autoridades municipales o estatales en funciones.
- 4) Atentados contra presidentes o funcionarios municipales.

Este tipo de acciones de la delincuencia, solas o combinadas, se traducen en una grave distorsión de la competencia electoral que amenaza, lesiona o cancela la autenticidad del sufragio. Aun cuando se cumplan las reglas y los procedimientos formales de la elección, la intromisión de la delincuencia atenta contra las bases mismas de la integridad de una elección democrática.

Apoyo a candidatos

Una de las vías para influir en los gobiernos es el apoyo a determinados candidatos durante la campaña electoral, sea con dinero, en especio o con persuasión de grupos sometidos a extorsión. Tal apoyo puede ser decisivo para el resultado de la elección, y compromete a los futuros gobernantes y sus funcionarios a dar facilidades a los delincuentes. Desde 2003, el entonces gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel (postulado por el Partido de la Revolución Democrática, de centro-izquierda) expresaba dentro del gobierno preocupación por la influencia de la delincuencia organizada en algunos gobiernos municipales y en la posible intromisión de la misma en la selección de candidatos de su propio partido. Sin embargo, casi nada pudo o quiso hacer para impedirlo. Comprensiblemente, no es fácil conocer pruebas formales de tales apoyos ilícitos, pero entre la población local era común la convicción o la creencia de que tal o cual candidato contaba con apoyo de la mafia (o “la maña”, como se le conoce más en el lenguaje regional).

El apoyo mafioso a un candidato también podía darse en forma negativa: hostigando o amenazando a candidatos rivales. En 2007 el Partido de la Revolución Democrática se vio obligado a sustituir a varios candidatos a alcaldes, presuntamente porque eran

amenazados por la delincuencia. Es probable que los candidatos sustitutos estuvieran vinculados de alguna forma a los criminales. También es de suponer que casos semejantes se produjeron en otros partidos. También en las elecciones federales de 2009 y en las locales de 2011, se conocieron varios casos de renunciadas repentinas e inexplicadas por parte de candidatos a ediles o diputados de partidos diversos (PRI, PAN). Los dimitentes argüían motivos personales o simplemente se retiraban en silencio, pero algunos representantes de partido denunciaron presiones de la delincuencia organizada. Una vez excluidos candidatos indeseables, se franqueaba el camino al triunfo de los aspirantes respaldados por la mafia.

La intromisión política de la delincuencia organizada no se limitó a las elecciones de ayuntamientos, diputados locales y federales; ascendió hasta la misma elección de gobernador del estado. Las elecciones locales de 2011 en Michoacán, con las que se renovarían el gobierno del estado, el Congreso y los 113 gobiernos municipales, se desarrollaron en un entorno de fuerte incidencia del crimen organizado. Para entonces, la Familia Michoacana había sufrido una guerra interna de la que surgió victoriosa una facción que adoptó un nuevo nombre: los Caballeros Templarios. Con el mismo modelo de operación criminal que su organización antecesora, los Templarios tuvieron capacidad de incidir en la determinación de muchas candidaturas y hasta en los resultados de algunas elecciones.

Durante la contienda electoral de 2011 y poco después de la jornada de votación, la candidata a gobernador del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón, denunció el presunto apoyo de la organización criminal al candidato del PRI, Fausto Vallejo, quien resultó triunfador por el escaso margen de 2.8%. Aunque en su momento no hubo pruebas al respecto, la presunción no parecía descabellada. La candidata del PAN era nada menos que la hermana mayor del presidente Felipe Calderón, quien había hecho de su combate a la delincuencia organizada la enseña de su gobierno. Evitar que ella se convirtiera en gobernadora cabía perfectamente en la lógica del interés de los Caballeros Templarios, quienes hasta entonces habían gozado de la condescendencia o protección del gobierno del estado. Algunos líderes locales del Partido de la Revolución Democrática también denunciaron informalmente presiones de los Templarios sobre algunas comunidades para votar por el candidato del PRI. Inclusive, el primer círculo del candidato a gobernador por el PRD se quejaba de que el gobernador Godoy parecía más interesado en facilitar el

triunfo del candidato priista Fausto Vallejo que el de su propio partido. A pesar de tales denuncias y a las impugnaciones ante los tribunales electorales, la ausencia de pruebas legales sobre esas supuestas complicidades condujo al reconocimiento del resultado electoral y Fausto Vallejo se convirtió en gobernador. En 2014 se conocerían públicamente pruebas de involucramiento con la delincuencia de miembros del gobierno de Vallejo y hasta de su propio hijo, que lo obligarían a renunciar al cargo. Después de tales evidencias, formalizadas por el propio gobierno federal, de origen priista, casi nadie duda de que las elecciones michoacanas de 2011 estuvieron contaminadas y hasta cierto punto determinadas por el crimen organizado.

Delincuentes en campaña

En el año 2009, con miras a las elecciones legislativas federales, algunos informes de inteligencia filtrados señalaban a varios candidatos a diputados, de diferentes partidos, por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Finalmente, dos casos quedaron documentados y evidenciados públicamente: el de Julio César Godoy, hermano del gobernador Leonel Godoy (del PRD), y el de Saúl Soliz, apodado *El Lince*, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Julio César Godoy inclusive resultó elegido en ausencia, porque huía de la justicia poco antes de la jornada electoral; más tarde fue introducido a la Cámara de Diputados por sus compañeros de partido para asumir el escaño y gozar del fuero parlamentario; en seguida, el gobierno federal publicó grabaciones telefónicas que incriminaban claramente al diputado como cómplice de uno de los jefes de La Familia Michoacana; la Cámara de Diputados reaccionó con el desafuero del diputado para que enfrentara a la justicia, pero éste volvió a huir y hasta la fecha nada se sabe de su paradero. El candidato del Partido Verde Ecologista, Saúl Soliz, llamó la atención por desplegar una costosa campaña de propaganda en un distrito (Apatzingán) en el que la presencia del partido que lo postuló era casi nula, pero la del crimen organizado era muy fuerte. *El Lince* estuvo muy lejos de ganar la elección, y en 2011 fue arrestado por la Policía Federal como jefe de plaza de Los Templarios. Hasta la fecha sigue en prisión.

Por su parte, el empresario resinero Martín Orneias, que en 2011 fue candidato del PRI a presidente del municipio de Salvador Escalante, en 2012 fue detenido en posesión de un pequeño arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de portar propaganda

de los Caballeros Templarios. Se halla bajo proceso por acopio de armas y delincuencia organizada.

Hay varios presidentes municipales de Michoacán sobre los que pesa la acusación de vinculación y complicidad con la delincuencia organizada. Aunque se presume que los vínculos delictivos se establecieron desde que eran candidatos, sus casos se hallan en proceso judicial y aún no hay pruebas fehacientes al respecto.

De cualquier modo, los casos conocidos revelan que la participación directa en política y en elecciones por parte de miembros de la delincuencia, es una tentación que algunos capos no pueden resistir, seguramente al calcular que un cargo público les daría más oportunidades de negocios ilícitos y los protegería de la eventual acción de la justicia.

Sumisión o complicidad de autoridades

La implantación del control territorial por parte de la delincuencia organizada, que lo mismo traficaba drogas que secuestraba y extorsionaba a comerciantes y productores, condujo, como consecuencia lógica, a su vinculación con autoridades policíacas y políticas en el ámbito local. El gobierno municipal es el nivel más débil del sistema de gobierno: finanzas insuficientes, escasa capacidad administrativa y técnica, policías mal armados y mal pagados; además, arraigo en la localidad de los miembros del gobierno y sus familias, que los hace vulnerables a la amenaza y la influencia de los grupos criminales. Pero el gobierno del estado de Michoacán, con más recursos que los ayuntamientos y facultado para prevenir y perseguir los delitos, fue igualmente omiso durante el período de la lucha entre los cárteles. El gobierno federal también fue pasivo o sólo actuaba en la región intermitentemente. Cuando *La Familia* se consolidó tras expulsar a los Zetas, a partir de 2008 contó con diversas formas de protección del gobierno estatal. Esta organización criminal gozó así de un paraíso: monopolio en el negocio de las drogas y en el control de otros negocios ilícitos, facilidades para expoliar a la población y una impunidad garantizada por la pasividad o complicidad de los gobiernos.

La etapa más intensa de empoderamiento de la delincuencia organizada en Michoacán ocurrió durante la última década en la que hubo tres gobiernos estatales: dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda, y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), del PRD, emergieron evidencias de que las bandas de narcotraficantes estaban extendiendo sus actividades a la exacción de rentas de la población y al control de gobiernos locales. Cárdenas hizo muy poco al respecto, salvo pedir discretamente apoyo al gobierno federal, que respondió hasta 2006, con la llegada a la presidencia de la República de Felipe Calderón (del Partido Acción Nacional).

Cuando llegó un nuevo gobernador del PRD, Leoneol Godoy (2008-2012), las relaciones con el presidente Calderón se deterioraron por el tratamiento que uno y otro le daba al problema de la delincuencia organizada. Godoy argüía que la inseguridad pública era un problema de origen social, que no debería combatirse con la policía. Además, sostenía que la delincuencia organizada correspondía al fuero federal, y por lo tanto no era competencia de su gobierno. Aunque este argumento es un tanto falaz, porque los homicidios en cuanto tales competen al fuero común de las autoridades estatales, con esta postura Godoy eludió combatir a la delincuencia. Esta posición del gobierno del estado dio lugar a muchas tensiones y conflictos entre éste y el gobierno federal, el más grave de los cuales ocurrió en mayo de 2009 cuando un amplio operativo policíaco-militar condujo a la detención de 30 funcionarios municipales y estatales de Michoacán, entre ellos 13 presidentes municipales pertenecientes a tres partidos diferentes, acusados de vinculación o complicidad con el crimen organizado.² Otros cinco funcionarios fueron arrestados días después. (Véase la Tabla 1). En procesos judiciales plagados de deficiencias y de dudosa objetividad, paulatinamente todos los acusados fueron liberados “por falta de pruebas”. Al parecer, las averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia estuvieron débilmente integradas. Pero también influyó la parcialidad del juez de la causa, quien más tarde fue sometido a investigación por el Consejo de la Judicatura (órgano de control del Poder Judicial) y destituido del cargo por venalidad. Abundaban los signos de una probable colusión del gobierno del estado con *La Familia*. El más escandaloso de ellos fue el caso referido arriba, cuando se descubrió que un medio-hermano del gobernador Godoy, elegido diputado federal del PRD, había sido patrocinado por *La Familia* y tenía un puesto de

² Ocho eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos del Partido Acción Nacional (PAN), el partido del presidente de la República.

mando en esa organización. A pesar de otros indicios de vinculación de Leonel Godoy con los jefes de *La Familia*,³ el gobierno federal no ha actuado legalmente contra él.

Tabla 1

1 de 2

Michoacán. Presidentes municipales, funcionarios municipales, funcionarios estatales y otros detenidos por presunta delincuencia organizada en 2009						
Nº	Funcionario	Cargo	Partido	Fecha de detención	Fecha de liberación	Tiempo en prisión
1	Genaro Guízar Valencia	Presidente Municipal de Apatzingán	PRD	26/05/2009	23/04/2010	11 meses
2	José Cortes Ramos	Presidente Municipal de Aquila	PRI	26/05/2009	29/06/2009	1 mes
3	Jairo Germán Rivas Páramo	Presidente Municipal de Arteaga	PRI	26/05/2009	16/08/2010	1 año 2 meses
4	Osvaldo Esquivel Lucatero	Presidente Municipal de Buenavista	PRD	26/05/2009	29/06/2009	1 mes
5	José Luis Ávila Franco	Presidente Municipal de Hidalgo	PAN	26/05/2009	29/01/2010	8 meses
6	Audel Méndez Chávez	Presidente Municipal de Coahuayana	PRI	26/05/2009	29/06/2009	1 mes
7	Mariano Ortega Sánchez	Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas	PRD	29/06/2009	02/09/2010	1 año 2 meses
8	Armando Medina Torres	Presidente Municipal de Múgica	PRI	04/09/2009	12/04/2011	1 año 7 meses
9	Uriel Farías Álvarez	Presidente Municipal de Tepalcatepec	PRI	26/05/2009	29/01/2010	8 meses
10	Adán Tafolla Ortiz	Presidente Municipal de Tumbiscatío	PRI	26/05/2009	29/01/2010	8 meses
11	Antonio González Rodríguez	Presidente Municipal de Uruapan	PAN	26/05/2009	29/01/2010	8 meses
12	Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela	Presidente Municipal de Zitácuaro	PRI	26/05/2009	09/03/2010	9 meses
13	Abel Salazar Gómez	Síndico de Lázaro Cárdenas		26/05/2009	29/01/2010	8 meses
14	Dionisio Salvador Valencia Palomares	Director de Obras Públicas de Arteaga		26/05/2009	29/01/2010	8 meses
15	Victorino Jacobo Pérez	Director de Seguridad Pública de Arteaga		26/05/2009	16/08/2010	1 año 2 meses
16	Roberto Rubio Vázquez	Director de Seguridad Pública de		26/05/2009	29/01/2010	8 meses

³ Por ejemplo, en una llamada telefónica intervenida por la Policía Federal en marzo de 2009, se oye a *La Tuta* justificar ante otro capo de La Familia la participación del gobernador Godoy en una reunión de las fuerzas de seguridad federales. “Mira *Tío*, *Tío*, entiende: él se tiene que arrimar, ni modo que no se arrime. Se supone que es la autoridad estatal”. El interlocutor de *La Tuta* era Dionisio Loya Plancarte, apodado *El Tío*, arrestado en enero de 2014. (Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H8_hoGQAHLE).

		Tumbiscatío				
17	Baldomero Morales	Policía Municipal de Lázaro Cárdenas		26/05/2009	29/01/2010	8 meses

Tabla 1

2 de 2

Nº	Funcionario	Cargo	Partido	Fecha de detención	Fecha de liberación	Tiempo en prisión
18	Antonio Sánchez Gaytán	Policía Municipal de Lázaro Cárdenas		26/05/2009	28/09/2010	1 año 4 meses
19	Miguel García Hurtado	Procurador de Justicia del Estado		27/05/2009	24/09/2010	1 año 4 meses
20	Ignacio Mendoza Jiménez	Subprocurador de Justicia del Estado		26/05/2009	29/01/2010	8 meses
21	Mario Bautista Ramírez	Director de Seguridad Pública en la Entidad		26/05/2009	26/08/2010	1 año 3 meses
22	Irlanda Sánchez Román	Policía Ministerial		26/05/2009	28/09/2010	1 año 4 meses
23	Alfredo Ramírez García	Policía Ministerial		26/05/2009	28/09/2010	1 año 4 meses
24	Noé Medina García	Policía Ministerial		26/05/2009	28/09/2010	1 año 4 meses
25	Faraón Martínez Molina	Policía Ministerial		26/05/2009	28/09/2010	1 año 4 meses
26	Gabriela Mata Chávez	Policía Ministerial		26/05/2009	29/01/2010	8 meses
27	Ramón Ponce Ponce	Asesor de la Procuraduría Estatal, ex Subprocurador de Justicia		26/05/2009	10/06/2010	1 año
28	Israel Tentory García	Asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Estatal		29/06/2009	19/08/2010	1 año 1 mes
29	Citlali Fernández González	Ex Secretaria de Seguridad Pública Estatal, Asesora del Gobernador		26/05/2009	29/01/2010	8 meses
30	Juan Gaona Gómez	Jefe de Agentes de la Secretaría de Gobierno		26/05/2009	21/05/2010	1 año
31	Ricardo Rubí Bustamante	Director de Si Financia		26/05/2009	11/05/2010	11 meses
32	Lorenzo Rosales Mendoza	Agente del Ministerio Público Federal		29/06/2009	20/08/2010	1 año 1 mes
33	Jaime Liera Álvarez	Juez		26/05/2009	29/01/2010	8 meses
34	Mario Manuel Romero Tinoco	Ex Presidente Municipal de La		09/07/2009	02/07/2010	1 año

		Huacana				
35	José Lino Zamora	Abogado litigante de Arteaga		26/05/2009	16/08/2010	1 año 2 meses
Fuente: Elaboración propia con datos periodísticos.						

El gobierno de Fausto Vallejo (2012-2014), del PRI, fue también pasivo ante la delincuencia organizada, aunque formalmente aceptaba el apoyo federal. Pero durante su breve mandato la delincuencia organizada creció como nunca y se apoderó de extensas zonas de la entidad, donde sometía a su dominación y explotación a productores, comerciantes, policías municipales y alcaldes. El imperio de los Caballeros Templarios parecía no tener límite; la extorsión y el secuestro pusieron en riesgo la supervivencia misma de miles de productores rurales, comerciantes y transportistas, y se multiplicaron los raptos y violaciones de jovencitas por parte de los sicarios. Ante el acoso criminal y la virtual ausencia del poder del Estado, en febrero de 2013, en una zona de la Tierra Caliente -Tepalcatepec y Buena Vista- surgieron los primeros grupos de Autodefensa o Guardias Comunitarias para enfrentar a los delincuentes y proteger la vida y la propiedad de la población. (Rivera, 2013, 2014)⁴ En unos cuantos meses, el movimiento de las Autodefensas se extendió a casi toda la parte sur del estado. , y obligó al gobierno federal a intervenir, pactar con ellas y, unos meses más tarde, promover su institucionalización como Fuerza Rural.

Ante la escalada de violencia y la ingobernabilidad que sacudió al estado durante 2013, en enero de 2014 el gobierno federal intervino directamente en las áreas de seguridad y finanzas del estado, nombró un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, y relegó de hecho al gobierno del estado; más tarde, (el 20 de junio) promovió la renuncia del gobernador priista y el nombramiento de un gobernador sustituto sin partido, Salvador Jara⁵, con apoyo directo y control parcial de la Federación.

Entre 2013 y 2014, se hicieron públicos indicios de involucramiento de Fausto Vallejo y su equipo de campaña con los Caballeros Templarios. Un informe de inteligencia

⁴ Sobre el fenómeno de las autodefensas en Michoacán véanse, de este mismo autor, “El abismo michoacano”, *Nexos*, septiembre de 2013; “Los límites de la depredación”, *Nexos*, abril de 2014, y “El crimen organizado y las autodefensas en México. El caso de Michoacán”, *Seguridad Regional*, Fundación Friedrich Ebert, junio de 2014.

⁵ Salvador Jara Guerrero era en ese momento rector de la Universidad Michoacana, y se había distinguido por poner límites a los grupos internos de presión. No pertenece a ningún partido político.

filtrado a un periodista afirmaba que el coordinador de la campaña de Fausto Vallejo se había reunido, meses antes de las elecciones, con uno de los principales jefes de los Caballeros Templarios. Se trataba de Jesús Reyna, quien en 2012 se había convertido en secretario de Gobierno, y en 2013 en gobernador interino.⁶ Finalmente, en abril de 2014 Jesús Reyna fue detenido por la Procuraduría federal y sometido a proceso penal por sus vínculos directos con los jefes de los Caballeros Templarios.⁷ Poco después, el segundo hijo del gobernador Vallejo fue también arrestado y sometido a proceso, después de conocerse un video en el que se le ve departiendo amigablemente con el principal jefe sobreviviente de los Templarios, Servando Gómez, *La Tuta*. Esas evidencias ayudaron a explicar la actitud sospechosamente pasiva que el gobierno de Michoacán mantuvo hacia la delincuencia.

En unos cuantos años, *La Familia* y *Los Templarios* lograron tejer una extensa red de control sobre policías y gobiernos municipales, a los que extorsionaban, sometían y ponían a su servicio. Para muchos presidentes y funcionarios municipales, someterse a las exigencias de la mafia parecía ser casi la única vía de supervivencia. La vinculación de los gobiernos municipales con el crimen organizado ha sido la norma, aunque hay distintas formas de vinculación: la más común es la sumisión pasiva a la extorsión, que se limita al pago de cuotas bajo amenaza;⁸ otra es la sumisión activa, mediante el nombramiento de personas ligadas a la delincuencia en puestos clave del gobierno municipal, como la policía y la dirección de obras públicas,⁹ y una más, es la complicidad deliberada, cuando la autoridad protege a los criminales y participa con ellos en negocios ilícitos. Esas distintas formas de vinculación no son excluyentes, sino frecuentemente complementarias; muchos funcionarios pasaron con el tiempo de una a la otra. En no pocos casos, el vínculo se estableció desde antes de las elecciones, por medio del financiamiento ilegal de las campañas.

⁶ Debido a graves problemas de salud, el gobernador Vallejo se ausentó repetidamente por varios meses.

⁷ Dos semanas después de la detención, se difundió un video, presuntamente grabado durante la campaña electoral de 2011, en el que Jesús Reyna aparecía en torno a una mesa con uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios. También lo acompañaba José Trinidad Martínez Pasalagua, ex diputado local del PRU y líder de transportistas urbanos.

⁸ Según el testimonio de varios alcaldes, la cuota básica es el 10% de todo el presupuesto para obras públicas, más cuotas extraordinarias variables.

⁹ El control del área de obras públicas es importante porque *Los Templarios* manejaban empresas que acaparaban contratos de los ayuntamientos.

Puede decirse que la mayoría o todos los gobiernos municipales de Michoacán han estado sometidos o vinculados de alguna forma a los *Templarios*. La Tabla 2 da cuenta resumida de los casos de alcaldes que, tan sólo durante 2014, gracias la intervención del gobierno federal, han sido detenidos y sometidos a proceso por delincuencia organizada. Como ejemplos, el alcalde de Apatzingán, el municipio que fungió por varios años como la capital del imperio de *La Familia y Los Templarios*, fue arrestado por la Procuraduría General de la República bajo la acusación de exigir a los regidores una parte de su sueldo para los *Templarios*, además de forzarlos a firmar la autorización de jugosos contratos para beneficiar a esa organización delictiva. Igualmente, el alcalde Lázaro Cárdenas, donde se encuentra el estratégico puerto del Pacífico, fue detenido junto con su tesorero por proteger y ayudar a la delincuencia organizada. Varios alcaldes han confesado públicamente que eran obligados a entregar dinero a los *Templarios* y suponen que todos los demás lo hacían. Como víctimas o cómplices, los gobiernos municipales han contribuido a la implantación de la inmensa red delictiva que exprime a la sociedad michoacana y distorsiona las actividades económicas.

Tabla 2

Michoacán. Presidentes municipales detenidos por presunta delincuencia organizada, 2014						
Nº	Nombre	Cargo	Municipio	Periodo del cargo	Partido Político	Fecha de detención
1	Uriel Chávez Mendoza	Presidente Municipal	Apatzingán	2012-2014	PRI	15/04/2014
2	Arquímedes Oseguera Solorio	Presidente Municipal	Lázaro Cárdenas	2012-2014	PRD	28/04/2014
3	Jesús Cruz Valencia	Presidente Municipal	Aguililla	2012-2014	PRI	13/05/2014
4	Dalia Santana Pineda	Presidenta Municipal	Huetamo	2012-2014	PRI	14/08/2014
5	Salma Karrum Cervantes	Presidenta Municipal	Pátzcuaro	2012-2014	PRI	16/08/2014
Fuente: Elaboración propia con datos periodísticos.						

A raíz de la intervención federal en Michoacán, durante 2014 se develaron varios casos de vinculación y complicidad de presidentes municipales con la delincuencia organizada. Los alcaldes de Apatzingán, Aguililla, por parte del PRI; las alcaldesas de Huetamo y Pátzcuaro, también del PRI; el presidente del municipio de Lázaro Cárdenas, del PRD, ... Seguramente estos no son los únicos presidentes municipales vinculados a la mafia. Varios

de los casos mencionados afloraron al darse a conocer videos en los que aparecen los ediles conversando amigablemente con el líder templario *La Tuta*. Tales videograbaciones han sembrado zozobra en decenas de otros alcaldes, quienes temen ser exhibidos en compañía de criminales y luego arrestados.

El recurso de las balas: políticos asesinados

La violencia siempre ha sido un medio natural de las organizaciones delincuenciales para conseguir sus fines. Los mafiosos pueden acercarse a los políticos ofreciéndoles apoyo para sus campañas o invitándoles a participar en sus negocios. Pueden incluso parecer aliados convenientes para protegerse de sus rivales políticos o de otros delincuentes. Por eso, Gambetta (2007: 25) definió genéricamente a la mafia como “una empresa que produce, promueve y vende protección privada”. Pero la violencia o la amenaza de la misma es siempre un recurso de los delincuentes, más aún cuando pretenden ejercer una dominación estable o una relación de negocios, ya que, por su carácter ilegal, no pueden recurrir a tribunales para hacer cumplir deudas o compromisos.

La dominación mafiosa sobre gobiernos municipales de Michoacán se ha traducido en una serie de asesinatos que son solamente la punta del iceberg de una extensa red de relaciones de sometimiento o complicidad bajo amenaza entre autoridades y criminales.

Tan sólo en el período de 2005 a 2014, se han registrado 33 asesinatos de políticos locales, con puestos diversos: siete presidentes municipales en funciones, seis ex presidentes municipales, además de otros funcionarios de ayuntamientos, candidatos y dirigentes de partido.

El caso más estremecedor es el de la presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, quien en 2009 sufrió un primer atentado a balazos junto a su marido, el cual resultó muerto; en 2010 fue atacada otra vez, y sobrevivió milagrosamente; finalmente, en noviembre de 2012, meses después de haber concluido su cargo, fue secuestrada y asesinada. Oficialmente nada se sabe de los culpables.

La mayoría de los asesinatos de autoridades municipales ha quedado impune y apenas se puede especular sobre los móviles específicos de los atentados. Aunque se presume que se trata de actos de la delincuencia organizada, no se sabe si se trató de ajustes

de cuentas entre criminales o de víctimas de extorsión que no pudieron pagar las cuotas exigidas.

La violencia que ha rodeado a algunos funcionarios municipales alimenta el temor y la desconfianza entre los grupos y líderes políticos locales. Algunos se inhiben de participar en política; otros ejercen el cargo en forma distorsionada por el miedo y las complicidades, y otros más tienen la tentación de buscar apoyo precisamente entre las bandas criminales para conquistar un cargo y luego ejercerlo bajo su supuesta protección. En cualquier caso, la competencia electoral y la función públicas resultan severamente envenenadas.

Tabla 3

Michoacán. Políticos asesinados de 2005 a 2014							
Nº	Nombre	Edad	Cargo	Municipio	Periodo del cargo	Fecha de muerte	Partido
1	Fernando Chávez López	S/D	Presidente Municipal	Buenavista	2005-2005	08/07/2005	PRI
2	Ramiro Rubio Esquivel	60	Ex Presidente Municipal	La Huacana	1999-2001	04/01/2008	PAN
3	Jesús Ortega Farías	S/D	Ex Presidente Municipal	Buenavista	2006-2007	11/04/2008	PRI
4	Leopoldo Juárez Urbina	S/D	Candidato a P. Municipal	Cherán	2007	11/05/2008	Conver.
5	Marcelo Ibarra Villa	50	Presidente Municipal	Madero	2008-2008	02/06/2008	PRI
6	Raúl Martínez Ulloa	46	Síndico	Tuzantla	2008-2008	28/06/2008	PRI
7	Gamaliel Mendoza Mendoza	S/D	Síndico	Zamora	2008-2008	04/07/2008	PAN
8	Ignacio Mondragón Serrado	43	Comandante Seg. Pública	Tiquicheo	2008-2008	02/08/2008	PRI
9	Antonio Mendoza Álvarez	S/D	Regidor	Coalcomán	2008-2008	04/08/2008	PRD
10	José Vázquez Piedra	S/D	Ex Presidente Municipal	Turicato	2005-2007	22/11/2008	PRD
11	Juvenal García Olivo	30	Jefe jurídico	Huetamo	2008-2008	04/12/2008	PRI
12	Rafael Blanco Estrada	S/D	Síndico	Peribán	2008-2009	20/01/2009	PRD
13	Octavio Manuel Carrillo Castellanos	36	Presidente Municipal	Vista Hermosa	2008-2009	24/02/2009	PRI
14	Gonzalo Paz Torres	S/D	Secretario de Ayuntamiento	Tancítaro	2008-2009	06/03/2009	PRD
15	Nicolás León Hernández	S/D	Ex Presidente Municipal	Lázaro Cárdenas	1986-1986	03/04/2009	PRI

Tabla 3

Nº	Nombre	Edad	Cargo	Municipio	Periodo del cargo	Fecha de muerte	Partido	Como murió
16	Gustavo Bucio Rodríguez	S/D	Candidato Sup. Dip. Fed.	Distrito 1 de Mich.	2009	07/04/2009	PRD	Balazos
17	José Luis Posadas Ramos	52	Administrador de Rentas	Tlazazalca	2008-2009	13/04/2009	PRD	Balazos
18	Efraín Gutiérrez Arcos	56	Ex Presidente Municipal	Santa Ana Maya	1996-1998	11/06/2009	PRI	Balazos
19	Gustavo Sánchez Cervantes	S/D	Presidente Municipal	Tancítaro	2009-2010	27/09/2010	S/P	Lapidado
20	Ricardo Guzmán Romero	46	Presidente Municipal	La Piedad	2008-2011	02/11/2011	PAN	Balazo
21	María Santos Gorrostieta Salazar	36	Ex Presidenta Municipal	Tiquicheo	2008-2011	15/11/2012	PRI-PRD	Balazos, golpe cráneo.
22	Miguel Ángel Farfán Ortega	44	Presidente de Comité Mpal.	Salvador Escalante	2012-2012	17/11/2012	PRI	Balazos
23	Wilfrido Flores Villa	S/D	Presidente Municipal	Nahuatzen	2012-2013	05/02/2013	PRI	Balazos
24	Marisela Delgado Márquez	23	Secretaría de Acción Juvenil	Morelia	¿?-2013	27/02/2013	PAN	Secuestrada / Degollada
25	Osvaldo Esquivel Lucatero	51	Diputado Local	Distrito XXI Coalcomán	2011-2013	11/09/2013	PRD	Machetazos
26	Javier Sagrero Chávez	S/D	Ex Presidente Municipal	Quiroga	2005-2007	14/09/2013	PRD	Balazos
27	Octavio Contreras Solórzano	S/D	Dirigente municipal	Apatzingán	¿?-2013	16/10/2013	PAN	Asfixia
28	Ygnacio López Mendoza	62	Presidente Municipal	Santa Ana Maya	2011-2013	07/11/2013	PT	Asfixia
29	Gustavo Garibay García	S/D	Presidente Municipal	Tanhuato	2012-2014	22/03/2014	PAN	Balazos
30	Salvador Vega Ramírez	35	Presidente de Comité Mpal.	Erongarícuaro	¿?-2014	05/06/2014	PRI	Balazos
31	Jesús Rodríguez Bueno	30	Síndico	Tzitzio	2012-2014	10/07/2014	PRI	Balazos
32	Arturo Alejandro Ramos	53	Presidente de Comité Mpal.	Nuevo Urecho	¿?-2014	25/07/2014	PRI	Balazos

Fuente: Elaboración propia con datos periodísticos.

Bibliografía

Gambetta, Diego. 2007. La mafia siciliana. El negocio de la protección privada. México: Fondo de Cultura Económica.

Grillo, Ioan. 2012. El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana. México: Tendencias.

Guerrero, Eduardo. 2012. “La estrategia fallida”, Nexos núm. 420, diciembre, México.

Guerrero, Eduardo. 2014. “La dictadura criminal”, Nexos, núm. 436, abril, México.

Ravelo, Ricardo. 2006. Los capos. Las narco-rutas de México. México: Debolsillo.

Rivera, Jaime 2013. “El abismo michoacano“, Nexos, núm. 429, septiembre, México.

Rivera, Jaime. 2014. “Los límites de la depredación”, *Nexos*, núm. 436, abril, México.

Valdés, Guillermo. 2013. Historia del narcotráfico en México. México: Aguilar.